

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CASTILLA-LA MANCHA (pp.
2-6)**

DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CASTELLA-LA MANXA (pp. 7-11)

NURIA MARÍA GARRIDO CUENCA

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universidad de Castilla-La Mancha

Sumario: 1. Un período de transitoriedad con escasas novedades. 2. Racionalización y austeridad: la reestructuración administrativa de las competencias en materia ambiental. 3. Modificación del Reglamento de Caza.

1. Un período de transitoriedad con escasas novedades

El período analizado ha sido pobre en producción normativa y acciones políticas relativas al medio ambiente. Lo cual es comprensible dado el escaso margen temporal transcurrido desde el vuelco electoral que a finales de mayo condujo al traspaso de poderes al nuevo Gobierno del Partido Popular salido de las urnas. Sin embargo, merece destacarse en esta crónica la reestructuración administrativa derivada del nuevo modelo de gobierno y que afecta, entre otras, a la Administración ambiental de nuestra Comunidad. La única novedad legislativa destacable es la esperada modificación del Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, que se ha producido durante este período.

2. Racionalización y austeridad: la reestructuración administrativa de las competencias en materia ambiental

Poco después de las elecciones autonómicas celebradas en Castilla-La Mancha y tras el cambio de Gobierno resultante, fue aprobado el Decreto 69/2011, de 27 de junio, que estableció la nueva estructura de la Administración regional. El nuevo modelo, imbuido claramente del espíritu de austeridad y racionalización administrativa que parece ser el eje del nuevo ejecutivo regional, reduce a siete las consejerías en que se estructura la Administración regional. La Consejería de Agricultura (a la que se poda de cualquier referencia nominativa sobre asuntos medioambientales) es la que parece aglutinar las competencias en materia de medio ambiente. El Decreto 126/2011, de 7 de julio, establece la nueva estructura de la Consejería de Agricultura, pero este debe modificarse rápidamente por Decreto 263/2011, de 30 de agosto, para adaptarlo a otra de las normas decisivas y de gran impacto en la estructura administrativa regional, el Decreto 248/2011, de 12 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las delegaciones provinciales y de los servicios periféricos de las consejerías, que, suprimiendo las primeras, despliega en cada provincia los ahora llamados servicios periféricos de cada consejería, que se estructurarán a su vez en coordinadores y secretarios provinciales. Esta medida tiene su origen en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, presentado el 31 de

agosto de 2011 como un severo plan de choque contra el gasto corriente cuyo objetivo es ahorrar 1.815 millones de euros, y que en su capítulo sobre racionalización de la estructura administrativa suprime, entre otros, los cargos de delegados de las consejerías para replantear la estructura de la Administración periférica autonómica. Además, parecieron advertirse errores importantes en la primera versión de la norma que estructuraba la Consejería, por lo que se consideró necesaria su subsanación y se corrigieron la mayoría de artículos.

Tras las modificaciones realizadas, se reducen los órganos directivos en los servicios centrales y se suprimen los cinco delegados provinciales. También se redistribuyen las competencias entre los nuevos órganos directivos, lo que implica cambios en la denominación de estos órganos para adaptarse a ellas. La exposición de motivos justifica la reestructuración de la siguiente forma: “para alcanzar una administración eficaz, y sobre todo eficiente, y adaptarse a la nueva situación derivada de la crisis económica [...]. La reducción de la estructura de la Consejería implicará que los recursos sean administrados con un mayor nivel de austeridad y eficiencia, optimizando la calidad de los servicios públicos que se prestan en el ámbito de sus competencias”.

De este modo, la Consejería de Agricultura será el órgano de la Administración autonómica de Castilla-La Mancha encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Consejo de Gobierno sobre política agrícola, ganadera y forestal, de conservación y protección del medio ambiente, de mitigación del cambio climático, de evaluación ambiental y de desarrollo sostenible (art. 1.1). En su estructura se encuadran, por una parte, los órganos directivos: Secretaría General, Dirección General de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, Dirección General de Montes y Espacios Naturales, Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental; y, por otra, los órganos periféricos: coordinadores y secretarios provinciales. Junto a ellos, la Oficina de Cambio Climático se mantiene como unidad administrativa dependiente del titular de la Consejería, siendo su función la de asesoramiento en relación con las actuaciones y las políticas regionales relacionadas con el cambio climático. Por otro lado, se adscribe también a la Consejería la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam, S. A.). El Cuerpo de Agentes Medioambientales queda adscrito orgánicamente a la Secretaría General de la Consejería (disposición adicional segunda). Tendrán la consideración de órganos colegiados regionales:

- El Consejo Regional de Caza.
- El Consejo Regional de Pesca Fluvial.
- El Consejo Asesor Agrario.
- El Consejo Asesor de Medio Ambiente.
- La Comisión Regional de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de Castilla-La Mancha.

Dentro de esta estructura, las funciones en materia medioambiental se reparten entre las dos direcciones generales competentes, la DG de Montes y Espacios Naturales y la DG de Calidad e Impacto Ambiental. Respondiendo a su nombre, la primera de ellas se reserva funciones más generales como la planificación y programación de la política en materia de recursos naturales; el estudio, la protección y la conservación de la fauna silvestre y sus hábitats, del suelo y de los ecosistemas; la ordenación de los recursos cinegéticos y piscícolas, los montes y las vías pecuarias; la gestión y el aprovechamiento forestal, incluida la lucha contra incendios; el impulso y la gestión de programas y ayudas europeos; las actuaciones relativas a la Red Regional de Áreas Protegidas, y, de modo fundamental, la gestión de los parques nacionales de la región.

Por su parte, son funciones de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, que actúa como autoridad ambiental de la Comunidad Autónoma, la prevención ambiental; la planificación, la coordinación, el seguimiento, la autorización y la vigilancia de residuos y otras actividades contaminantes; la gestión del sistema de etiqueta ecológica europea y del distintivo de garantía de calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; la coordinación de las actuaciones necesarias en relación con el Consejo Asesor de Medio Ambiente; las relativas a la educación ambiental; la planificación y programación de la política medioambiental en materia de evaluación, impacto y control ambiental, y de investigación y desarrollo; la evaluación del impacto ambiental de proyectos, planes y programas, así como la autorización ambiental integrada; la vigilancia y el control de la calidad del aire; la coordinación y el fomento de políticas en materia de cambio climático y emisión de gases de efecto invernadero, y la gestión del sistema de auditoría y gestión medioambiental.

Finalmente, destacamos que son varias las resoluciones que proceden a la delegación de competencias en materia medioambiental, destacando la Resolución de la DG de

Calidad e Impacto Ambiental de 21 de julio de 2011, por la que se delegan las competencias en materia de evaluación ambiental y gestión de residuos en las secretarías provinciales de la Consejería de Agricultura.

3. Modificación del Reglamento de Caza

La única norma sustantiva de este período es el Decreto 257/2011, de 12 de agosto (DOCM de 17 de agosto de 2011), por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha.

Tras más de catorce años de vigencia de la anterior norma reglamentaria, parecía imperiosa la necesidad de modificar algunos preceptos para adaptarlos a las circunstancias actuales. Por otro lado, se ha considerado necesario adecuar, en aras de la seguridad jurídica, esta norma a las modificaciones que en la Ley autonómica se habían realizado primero por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, y posteriormente por la Ley 3/2006, de 5 de octubre, por la que se modifica la Ley 2/1993, de 5 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha.

Este nuevo reglamento ha recibido el informe favorable del Consejo Regional de Caza y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y, teniendo en consideración a los colectivos con intereses más directos en materia cinegética, ha sido recibido con todos los parabienes. Lo cual tiene su importancia dada la trascendencia de la actividad cinegética en Castilla-La Mancha, que mueve alrededor de 600 millones de euros al año, genera 6.500 empleos fijos y supone más de 1.600.000 de jornales anuales. Sin contar con que el número de licencias en toda la región supera las 180.000 y existen más de 5.700 cotos de caza.

Entre sus novedades más destacadas se señalan la apuesta por una mayor estabilidad en los cotos gestionados por sociedades locales; la inclusión entre las finalidades de los cerramientos especiales la de evitar accidentes de tráfico y problemas de salud en suelos contaminados por metales pesados, y, de modo fundamental, la ampliación del período de caza para cotos intensivos de caza menor hasta el 28 de febrero, lo que ha sido valorado por los colectivos interesados como un importante incentivo para la creación de nuevos puestos de trabajo en la región.

Además, desde el punto de vista medioambiental, es importante la sustitución de los anexos I y II, al haber sido eliminadas algunas especies objeto de caza por tener la consideración de exóticas y estar prohibida su suelta con arreglo a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o por no estar incluidas como especies objeto de caza en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Se incorporan, asimismo, el arruí y el muflón como especies exóticas objeto de control de poblaciones.

Sumari: 1. Un període de transitorietat amb poques novetats. 2. Racionalització i austerioritat: la reestructuració administrativa de les competències en matèria ambiental. 3. Modificació del Reglament de caça.

1. Un període de transitorietat amb poques novetats

El període analitzat ha estat pobre en producció normativa i en accions polítiques referides al medi ambient. Això s'entén atès el poc marge temporal transcorregut des del canvi electoral que a finals de maig va conduir al traspàs de poders al nou Govern del Partit Popular sortit de les urnes. No obstant això, en aquesta crònica cal destacar la reestructuració administrativa derivada del nou model de govern i que afecta, entre altres, l'Administració ambiental de la nostra comunitat. L'única novetat legislativa destacable és l'esperada modificació del Reglament de caça de Castella-la Manxa, que s'ha realitzat durant aquest període.

2. Racionalització i austerioritat: la reestructuració administrativa de les competències en matèria ambiental

Poc temps després de les eleccions autonòmiques a Castella-la Manxa i després del canvi de govern resultant, s'ha aprovat el Decret 69/2011 de 27 de juny de 2011, que estableix la nova estructura de l'Administració regional. El nou model, imbuït clarament per l'esperit d'austeritat i de racionalització administrativa que sembla que es converteix en l'eix del nou executiu regional, redueix a set les conselleries en què s'estructura l'Administració regional. La Conselleria d'Agricultura (la qual es poda de qualsevol referència nominativa sobre assumptes mediambientals) és la que sembla que aglutina les competències en matèria de medi ambient. El Decret 126/2011, de 7 de juliol, estableix la nova estructura de la Conselleria d'Agricultura, però aquest decret ha de modificar-se ràpidament pel Decret 263/2011, de 30 d'agost, per adaptar-lo a una altra de les normes decisives i de gran impacte en l'estructura administrativa regional, el Decret 248/2011, de 12 d'agost, pel qual es regulen l'estructura orgànica i les competències de les delegacions provincials i dels serveis perifèrics de les conselleries, que, suprimint les delegacions, a cada província desplega els anomenats serveis perifèrics de cada conselleria, que, al seu torn, s'estructuren en coordinadors i secretaris provincials. Aquesta mesura té l'origen en l'anomenat Pla de Garantia dels Serveis Socials Bàsics de Castella-la Manxa, presentat el 31 d'agost de 2011 com una pla de

xoc sever contra la despesa corrent, amb l'objectiu d'estalviar 1.815 milions d'euros i que en el capítol sobre racionalització de l'estructura administrativa suprimeix, entre altres, els càrrecs de delegats de les conselleries per replantejar l'estructura de l'Administració perifèrica autonòmica. D'altra banda, es van assenyalar errors importants en la primera versió de la norma que estructurava la conselleria, per la qual cosa semblava imperant que s'esmenessin, corregint la majoria dels articles.

Després de les modificacions realitzades, es redueixen els òrgans directius als serveis centrals i se suprimeixen els cinc delegats provincials. També es redistribueixen les competències entre els nous òrgans directius, la qual cosa implica, a més, un canvi en la denominació per adaptar-se a les mateixes competències. Sobre la justificació d'aquesta reestructuració, l'exposició de motius ens ho aclareix en aquests termes: “*para alcanzar una administración eficaz, y sobre todo eficiente, y adaptarse a la nueva situación derivada de la crisis económica (...) La reducción de la estructura de la Consejería implicará que los recursos sean administrados con un mayor nivel de austeridad y eficiencia, optimizando la calidad de los servicios públicos que se prestan en el ámbito de sus competencias*”.

D'aquesta manera, la Conselleria d'Agricultura és l'òrgan de l'Administració autonòmica de Castella-la Manxa encarregat de la proposta i de l'execució de les directrius del Consell de Govern sobre la política agrícola, ramadera i forestal, de conservació i protecció del medi ambient, de mitigació del canvi climàtic, de l'avaluació ambiental i del desenvolupament sostenible (art.1.1). En la seva estructura s'enquadren, d'una banda, els òrgans directius: la Secretaria General, la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, la Direcció General d'Infraestructures i Desenvolupament Rural, la Direcció General de Forests i Espais Naturals, la Direcció General de Qualitat i Impacte Ambiental; i de l'altra, els òrgans perifèrics: coordinadors i secretaris provincials. Juntament amb aquests, l'Oficina de Canvi Climàtic es manté com a unitat administrativa dependent de la persona titular de la Conselleria, i la seva funció és assessorar amb relació a les actuacions i les polítiques regionals relacionades amb el canvi climàtic. D'altra banda, l'empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam, SA) també s'adscriu a la conselleria. El Cos d'Agents Mediambientals queda adscrit orgànicament a la Secretaria General de la conselleria (disposició addicional segona). I, finalment, es consideren òrgans col·legiats regionals:

-El Consell Regional de Caça.

- El Consell Regional de Pesca Fluvial.
- El Consell Assessor Agrari.
- El Consell Assessor de Medi Ambient.
- La Comissió Regional de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de Castella-la Manxa.

En aquesta estructura, les funcions en matèria mediambiental es reparteixen entre les dues direccions generals competents, la Direcció General de Forests i Espais Naturals i la Direcció General de Qualitat i Impacte Ambiental. Responent a la denominació, la primera es reserva les funcions més generals referides a la planificació i programació de la política en matèria de recursos naturals; l'estudi, la protecció i la conservació de la fauna silvestre i els seus hàbitats, el sòl i els ecosistemes; l'ordenació dels recursos cinegètics i piscícoles, muntanyes i vies pecuàries; la gestió i l'aprofitament forestal, fins i tot la lluita contra incendis; l'impuls i la gestió de programes i ajudes europees; les actuacions relatives a la Xarxa Regional d'Àrees Protegides, i, fonamentalment, la gestió dels parcs nacionals de la regió.

D'altra banda, les funcions de la Direcció General de Qualitat i Impacte Ambiental, que actua com a autoritat ambiental de la Comunitat Autònoma, són les següents: les relatives a la prevenció ambiental, i la planificació, la coordinació, el seguiment, l'autorització i la vigilància de residus i altres activitats contaminants; la gestió del sistema d'etiqueta ecològica europea i del distintiu de garantia de qualitat ambiental a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa; la coordinació de les actuacions necessàries amb relació al Consell Assessor de Medi Ambient; les funcions relatives a l'educació ambiental; la planificació i programació de la política mediambiental en matèria d'avaluació, impacte i control ambiental, de la investigació i del desenvolupament; l'avaluació de l'impacte ambiental de projectes, plans i programes, així com l'autorització ambiental integrada; la vigilància i el control de la qualitat de l'aire; la coordinació i el foment de polítiques en matèria de canvi climàtic i l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle; la gestió del sistema d'auditoria i la gestió mediambiental.

Finalment, destaquem que les resolucions que deleguen competències en matèria mediambiental són diverses, i en destaquem la Resolució de la Direcció General de Qualitat i Impacte Ambiental de 21 de juliol de 2011, per mitjà de les quals es deleguen

les competències en matèria d'avaluació ambiental i gestió de residus en les secretaries provincials de la Conselleria d'Agricultura.

3. Modificació del reglament de caça

L'única norma substantiva d'aquest període és el Decret 257/2011, de 12 d'agost (DOCM de 17 d'agost de 2011), que modifica el Decret 141/1996, que aprova el Reglament general d'aplicació de la Llei 2/1993, de 15 de juliol, de caça de Castella-la Manxa. Després de més de catorze anys de vigència de la norma reglamentària anterior, semblava imperiosa la necessitat de realitzar una sèrie de modificacions de diversos preceptes per adaptar-los a les circumstàncies actuals. D'altra banda, per obtenir seguretat jurídica, s'ha considerat que cal adequar aquesta norma a les modificacions que en la llei autonòmica s'havia realitzat primer per la Llei 9/1999, de 26 de març, de conservació de la natura i posteriorment per la Llei 3/2006, de 5 d'octubre, de modificació de la nostra llei de caça. Aquest nou reglament ha rebut l'informe favorable del Consell Regional de Caça i del Consell Assessor del Medi Ambient, i, tenint en consideració els col·lectius amb interessos més directes en matèria cinegètica, s'ha rebut amb felicitacions. Això té la seva importància, atesa la transcendència de l'activitat cinegètica a Castella-la Manxa, ja que mou al voltant de 600 milions d'euros cada any, genera 6.500 llocs de treball fixos i requereix més de 1.600.000 jornals anuals. Sense tenir en compte que el nombre de llicències en tota la regió supera les 180.000 i que hi ha més de 5.700 vedats de caça.

Entre les novetats més destacades cal assenyalar l'aposta per l'estabilitat més gran en els vedats dels municipis que gestionen les societats locals; la inclusió entre les finalitats de les tanques especials les d'evitar accidents de trànsit i problemes de salut en sòls contaminats per metalls pesants; i fonamentalment, l'ampliació del període de caça per a vedats intensius de caça menor fins al 28 de febrer, la qual cosa ha estat valorada pels col·lectius interessats com un esperó important per a la creació de nous llocs de treball a la regió.

A més, des del punt de vista mediambiental, és important la substitució dels annexos I i II, ja que s'han eliminat unes quantes espècies objecte de caça perquè es consideraven exòtiques i la solta de les quals es prohibia d'acord amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, o perquè no estaven incloses en la

Directiva 79/409/CEE, del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres com a espècie objecte de caça. Així mateix, s'incorporen l'arruí i el mufló com a espècies exòtiques objecte de control de poblacions.